

MINUTA LEGISLATIVA

El límite de invierno es una tarifa especial que impone un sobrecargo adicional a clientes residenciales (BT1 de alto consumo), que utilizan el sistema eléctrico durante el período de invierno: Si bien dicha tarifa opera cada año desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, sus efectos comienzan a hacerse más notorios a contar del mes de junio, que es precisamente la época cuando comienzan a descender de forma más notorias las temperaturas en el centro y sur del país.

Este cobro de carácter estacional impacta principalmente en el bolsillo de las familias de bajos ingresos, que proporcionalmente son las que destinan una mayor parte de sus ingresos en los pagos de gastos de servicios básicos. El consumo adicional durante los meses más fríos del invierno, puede hacer incrementar la cuenta de la boleta de luz en hasta un 25%.

La tarifa especial de invierno no posee un sustento técnico, ni mucho menos ha demostrado ser una política pública útil para disminuir el consumo de energía eléctrica. Esto, porque tras muchos años de análisis y estudio de sus alcances, las cifras indican que el consumo ha incrementado cada año pese a esta restricción, aún más en invierno, debido a la calefacción que se requiere durante estos meses en que se registran las temperaturas más bajas del año.

Este cobro estacional es considerado un castigo a las familias más humildes: Los meteorólogos pronostican que este invierno será particularmente frío, lo cual generará un cobro excesivo en las cuentas de luz, resultando complejo para el bolsillo, considerando los factores económicos y la inflación que no afloja y que afecta a las familias de Chile.

Por otra parte, es un contrasentido del Gobierno aplicar este castigo a la calefacción mediante consumo eléctrico, y al mismo tiempo buscar promover una agenda de políticas de energías verdes, buscando reemplazar otros combustibles más contaminantes (como la leña y la parafina).

Finalmente, si bien existen proyectos de ley presentados por distintos parlamentarios que buscan terminar con este cobro durante los meses de invierno,

requieren el patrocinio del Ejecutivo. Sin embargo, existe una vía más rápida para lograr el cambio: El Gobierno puede modificar esta medida mediante decreto administrativo. Por tanto, la última palabra la tiene el Presidente de la República.

MINUTA LEGISLATIVA

Durante el año 2018, fue ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto de royalty minero (boletín Nº 12.093-08) para su tramitación. Esta iniciativa, busca una compensación en favor del Estado por la explotación minera de cobre y litio.

Los autores del proyecto, señalan que, teniendo presente a la minería como principal motor económico de Chile, y que, los recursos en cuestión son de carácter naturales no renovables, resulta necesario gravar de manera especial su explotación, en compensación por el usufructo del recurso, que por disposición constitucional le pertenece al Estado.

Chile no posee actualmente un Royalty a la Minería, sino más bien, sólo un impuesto específico que grava la actividad, el cual se encuentra establecido en el Título IV bis del Decreto Ley Nº 824, que aprueba el texto de Ley sobre el Impuesto a la Renta (Decreto Ley Nº 824 o Ley sobre el Impuesto a la Renta). Este impuesto, fue establecido por la Ley Nº 20.026, del año 2005, y posteriormente modificado por la Ley Nº 20.469, del año 2010, el cual introdujo una serie de modificaciones a la tributación de la actividad minera, concretamente, modificando las tasas aplicables e introduciendo el concepto de Renta Imponible Operacional Minera (RIOM). Este impuesto, tiene su aplicación en base a la renta operacional de la actividad minera, ejercida por el explotador minero que extrae sustancias minerales de carácter concesible.

Así, y teniendo presente que este impuesto se considera como un gasto necesario para efectos de la determinación del impuesto de Primera Categoría, no es más que el reconocimiento contable de un desembolso que reduce la base imponible del impuesto a la Renta definitivo que resulte a pagar por la empresa.

Por lo anterior, se concluye que el hasta ahora llamado 'Royalty a la Minería' en Chile, no es más que un impuesto específico a la renta, y no un royalty propiamente tal, desde el punto de vista de las definiciones existentes.

En consecuencia, los parlamentarios que impulsan el proyecto, argumentan que este impuesto específico de la minería, no ha tenido un efecto significativo desde el punto de vista del Producto Interno Bruto (PIB). En efecto, según los datos proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos (SII), este no ha significado

más del 0,3% del PIB desde su creación. Es más, durante el transcurso del año 2017, llegó a ser 0%. Esto, a su vez contrasta con otros impuestos a productos específicos que son superiores o iguales a la participación que tiene la minería en el PIB, como lo son los tabacos (0,5%), los combustibles (0,8%), e incluso el impuesto a los actos jurídicos (0,2%). Lo anterior, viene a evidenciar la insignificancia que ha tenido este impuesto en las rentas tanto nacionales como regionales.

La experiencia comparada indica que, en países como Canadá, Argentina, Indonesia, Filipinas, Polonia, Tanzania y Australia, se fija un impuesto sin relación a los ingresos, ventas, utilidades o beneficios, sino al valor del mineral.

Por su parte, la Constitución Política de la República, en su artículo 19 N° 24, inciso 6º, prescribe que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos tanto de carbón como hidrocarburos, y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuviesen situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.

Tras años de debate, y luego de que el Gobierno patrocinara el proyecto, finalmente la iniciativa se configuró de manera tal de derogar el impuesto específico a la actividad minera. Así, la tributación de la minería comenzará a ser regulada por un cuerpo legal propio.

Además, se busca establecer que el detalle de la carga tributaria de los explotadores mineros quede en función de las ventas o las toneladas métricas de cobre fino (TMCF). Así, quienes tengan ventas menores a un 50% de cobre o cuya producción sea inferior al equivalente de 50.000 TMCF, mantendrán la tributación actual. Por su parte, quienes representen ventas superiores al 50% de cobre o que produzcan más de 50 mil TMCF por año, tendrán un esquema de tasas configurado a través de dos componentes:

- a) El primer componente propuesto en la iniciativa, dice relación con el ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre.
- b) El segundo componente queda establecido sobre el margen minero, en tasas que oscilarán entre el 8% y el 26%: Aquellas que superen el 60% de margen operacional minero, pagarán el 26%.

Por otra parte, los explotadores cuya producción sea inferior a las 80.000 TMCF anual, tendrán una carga potencial máxima de 45,5%. Para el resto, la carga potencial máxima será de 46,5%.

Beneficios territoriales

El espíritu incorporado en la discusión legislativa del proyecto, busca establecer una distribución de mayores recursos a los Gobiernos Regionales y los municipios del país, con un enfoque territorial.

De esta manera, los recursos recaudados mediante la gran minería retornarán a las localidades de origen, buscando ser retribuir a las 32 comunas que cuentan con actividad minera de gran escala en sus territorios.

Las estimaciones del Ministerio de Hacienda, suponen un total de 450 millones de dólares adicionales para Gobiernos Regionales y municipios a través de este Royalty Minero, los cuales se pretenden distribuir de la siguiente manera a través de la creación de los respectivos fondos:

- Fondo para la productividad y el desarrollo: 225 millones de dólares para Gobiernos Regionales destinados para el financiamiento de inversión productiva a través de proyectos, planes y programas que tengan por objeto el fomento de actividades productivas, de desarrollo regional y promoción científica y tecnológica.
- Fondo de comunas mineras: 55 millones de dólares destinados a comunas mineras que ejecuten faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, relaves, puertos, y otros. De esta forma, se busca compensar las externalidades negativas que genera la industria de la minería. Dentro de las comunas beneficiadas, son las que se emplazan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y

O'Higgins. Se calcula que son 32 comunas, con un alcance de 2 millones de personas.

- Fondo de apoyo para la equidad territorial: Son 170 millones de dólares los estimados para ser destinados a las comunas más vulnerables del país. El objetivo de esta iniciativa es avanzar en el cierre de las brechas de ingreso de carácter territorial, por lo que se focaliza a las comunas que poseen poca capacidad de generación de ingresos propios. El universo de comunas beneficiadas alcanzaría las 300 en todo el país, impactando a cerca de 11 millones de personas.

Adicionalmente, y luego de ser perfeccionado el proyecto en las Comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se ha considerado adelantar los recursos a los gobiernos locales para el próximo año 2024 a través de la creación de fondos regionales y comunales, puesto que la recaudación del Royalty comenzaría a llegar recién en el año 2025 a las regiones.

Por lo anterior, se ha propuesto establecer la creación de un 'Fondo Puente' para ir en apoyo a las regiones y municipios para el año 2024, considerando un 50% (112,5 millones de dólares) en beneficio de Gobiernos Regionales a través del fondo para la productividad y desarrollo; 85 millones de dólares para el fondo de equidad territorial en favor de las comunas más vulnerables; y 27,5 millones de dólares en beneficio del fondo de comunas mineras.

De manera adicional, se busca crear un fondo plurianual para la seguridad ciudadana, establecida en la Ley de Presupuestos año 2024: Este fondo compromete asignar un aporte de 350 millones de dólares anuales por tres años, con cargo a la cuenta de Royalty Minero, desde el año 2025.

Finalmente, se ha acordado la creación de un fondo trianual de recursos para el apalancamiento de proyectos de inversión en infraestructura productiva en las regiones del norte del país, que abarcan desde Arica y Parinacota a Coquimbo. Se contemplan recursos que llegarían a los 200 millones de dólares anuales en las respectivas leyes de Presupuestos para los años 2024 al 2026, los que,

condicionados a la evaluación de su funcionamiento, incorporarán su distribución de recursos al Royalty, con la misma vigencia de los fondos en beneficio comunal y regional.

Críticas al proyecto

Si bien mediante el transcurso de la discusión legislativa se fueron incorporando indicaciones que permitieron llegar a acuerdos para generar un proyecto más razonable, que considerara alcanzar una mayor recaudación de recursos que impartiera justicia social y territorial, y al mismo tiempo mantener el interés de los inversionistas para futuros proyectos mineros, existen una serie de críticas al proyecto, que llama a analizar con profundidad y especial atención los detalles, a fin de no continuar perdiendo competitividad.

Esto último, específicamente porque -si bien- se logró reducir la carga tributaria del componente ad valores, que en un inicio los autores de la iniciativa establecían en 3%, se acordó proponer un 1%; además, se abrió la posibilidad de que el componente quedara indexado al precio del cobre, y no así al margen de utilidad de las empresas; hay que tener en especial consideración que un proyecto de estas características resta competitividad.

Economistas críticos al proyecto, han estimado que esta iniciativa incorpora al menos 10 puntos a la carga tributaria actual. Además, y considerando el contexto actual, en donde recientemente se ha dado a conocer que Chile ha perdido 25 puntos en el ranking de competitividad mundial de la industria minera, enciende las alarmas. Esto, puesto que el proyecto complicaría inversiones futuras en la industria, aumentando considerablemente los costos.

Es indiscutible que al ser el cobre un recurso no renovable, el Estado debe obtener una justa compensación por su explotación. Sin embargo, se ha de prever que esta sea razonable a fin de no perjudicar la inversión.

El último resultado del ranking de competitividad minera no trajo buenas noticias para el país: En una medición de 60 zonas mineras, Chile cae 25 puntos, quedando rezagado por detrás de países como Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Al

contrario, estos países sudamericanos se posicionan, al igual que Irlanda, Finlandia o Suecia, como destinos atractivos para realizar inversiones.

Esta caída estrepitosa, se explica en parte a los reiterados cambios en las 'reglas del juego': Constantes reformas tributarias de cada uno de los últimos gobiernos, reformas laborales, incremento de la carga tributaria, reforma al sistema de pensiones que aún no ha podido ver la luz, huelgas y paros de trabajadores, eliminación del Decreto Ley 600, proceso constituyente aún sin definir, revuelta social y el constante rechazo de proyectos de inversión en el sector minero.

Por esto, es que se hace profundamente necesario, mirando a largo plazo, poder llegar a un acuerdo que sea beneficio, pero a la vez sostenible en el tiempo, considerando factores de justicia y equidad territorial y social, pero también de inversiones y crecimiento económico para el país.

